

**República de Colombia**  
**Rama Judicial del Poder Público**



**Juzgado Diecinueve Civil Municipal**

Bogotá D.C, cuatro (4) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

**Ref. No. 2022-00952.**

**I. OBJETO DE LA DECISIÓN**

Resuelve el Despacho las objeciones formuladas por el acreedor Fondo Nacional del Ahorro Carlos Lleras Restrepo frente a la relación de acreencias efectuada por el Centro de Conciliación y Arbitraje Constructores de Paz, dentro del trámite de insolvencia de persona natural no comerciante de Dionisio Martínez Rodríguez.

**II. ANTECEDENTES**

**1.** El señor de Dionisio Martínez Rodríguez, promovió solicitud de negociación de deudas de persona natural no comerciante, en la cual relacionaron varias acreencias dentro de ellas: **i)** una de primera clase a favor de la Secretaría Distrital de Hacienda; **ii)** un crédito hipotecario a favor del Fondo Nacional del Ahorro Carlos Lleras Restrepo en la suma \$ 114.570.978,44 y **iii)** 3 obligaciones de quinta clase a favor del Banco Davivienda, Banco Serfinanza S.A y Tuya S.A Compañía de Financiación, cuyo conocimiento correspondió a la operadora de insolvencia Beatriz Helena Malavera López del Centro de Conciliación y Arbitraje Constructores de Paz que, en auto No. 11048-2022 del 22 de junio de 2022 admitió la petición y en consecuencia, ordenó comunicar a todos los acreedores relacionados por el deudor peticionario y la notificación a las agencias judiciales para prevenirlos sobre la actuación.

**2.** En audiencia celebrada el 8 de agosto de 2022 se puso en conocimiento de los acreedores la relación detallada de las acreencias denunciadas y se actualizaron los montos de capital e intereses, así como la clase de crédito de cada uno de ellos. Durante dicha audiencia, el acreedor hipotecario el Fondo Nacional del Ahorro Carlos Lleras Restrepo formuló objeciones.

**3.** Dentro de la oportunidad, presentó la sustentación de las objeciones, argumentando que el deudor Dionisio Martínez Rodríguez adquirió con esa entidad un crédito hipotecario desembolsado el 30 de diciembre de 2014 por una suma de \$179.900.000 para ser liquidado y cancelado en el sistema de

amortización cíclico decreciente en unidades de valor real (UVR), a un plazo de 25 de años y una tasa de interés e equivalente al 7.50% EA, cuyo capital liquidado al momento en que se inició el trámite de insolvencia ascendía a la suma \$239.009.366,96 por concepto de capital, seguros y alivio COVID.

Agregó que, el pagaré largo plazo en U.V.R No. 79512926 suscrito el 16 de septiembre de 2014 fue firmado por el deudor en calidad de afiliado al Fondo Nacional del Ahorro correspondiendo a un crédito individual con ingresos del cónyuge no afiliado, presentando un estado de cuenta al 20 de junio del presente año, por los siguientes conceptos:

SALDO CAPITAL	\$231.437.052,73
INTERESES CORRIENTES	\$31.928.147,36
INTERESES DE MORA	\$1.158.758,72
SEGUROS	\$5.323.753,68
OTROS	\$7.117.471,55
GASTOS PROCESO EJATIVO	\$470.163
<b>VALOR DEUDA TOTAL</b>	<b>\$277.435.347,04</b>

De manera que para efectos del proceso de insolvencia, tomando en consideración las sumas adeudadas por concepto de capital, alivio COVID aplicado a la obligación y primas de seguros, la acreencia asciende \$239.009.366,96 saldo que se encuentra liquidado con estricto apego a los términos pactados en el contrato de mutuo celebrado por las partes, y el deudor se encuentra en mora desde el mes de noviembre de 2020, sin que sea dable dividir la prestación derivada de la hipoteca haciendo referencia al artículo 2433 del Código Civil.

**4.** De las objeciones se corrió traslado al deudor, quien dentro de la oportunidad legal pertinente se pronunció argumentando que las mismas son extemporáneas como quiera que no se presentaron dentro de los cinco (5) días contemplados en el artículo 552 del C.G.P., de ahí que, no debían ser tenidas en cuenta.

Aunado a lo anterior, indicó que la señora ROSA EMILDA PEÑA GARZON y DIONISIO MARTINEZ RODRIGUEZ tienen una sociedad conyugal vigente, adquirieron la obligación con el Fondo Nacional del Ahorro, no obstante, debido a problemas económicos se vieron en la obligación de acudir al proceso de insolvencia de persona natural no comerciante por lo que la manera más lógica de asumir los pasivos por parte de los obligados solidariamente es que cada uno de ellos asuma el 50% de la deuda como si se hubiese liquidado la sociedad, tratándose de una acreencia divisible y susceptible de ser sufragada por ambos deudores atendiendo al régimen patrimonial común que rigen este tipo de

relaciones, y a la libre disposición respecto de los bienes propios en cabeza de los cónyuges que permite al deudor asumir el pago de las obligaciones adquiridas personalmente en la proporción que le concierne.

### III. CONSIDERACIONES

1. Dentro del amplio abanico de posibilidades con que el deudor cuenta para honrar sus obligaciones frente a sus acreedores producto de una crisis por el sobreendeudamiento u otros factores, el Legislador creó un nuevo régimen de insolvencia para personas naturales no comerciantes, que tiene como punto de partida el procedimiento de negociación de deudas, luego, la convalidación del acuerdo privado y la liquidación patrimonial.

Ubicados en el primer escenario, cumple anotar desde el umbral que se trata de una serie de procedimientos en virtud de los cuales intervienen el deudor y sus acreedores, en cuya primera fase está encaminada a buscar alternativas efectivas de solución de las obligaciones vencidas a través de distintas fórmulas de arreglo que permitan llegar a lo normalidad crediticia.

En ese sentido, la proposición debe ser clara, expresa y objetiva, es decir, acorde con su estado patrimonial y el de los convocados; en otros términos, equilibrada, razonable, proporcional, posible de cumplir en procura de buscar la satisfacción e igualdad de los acreedores sin desconocer los lindes de privilegio que detentan algunas acreencias.

Ahora, la articulación atañadera a este trámite es estricta al señalar que las relaciones o listados de acreedores, activos, procesos judiciales, certificaciones, en fin, toda clase de información que es de su esencia, deben ser fieles a la realidad, completos, detallados y sobre todo actualizados *“con corte al último día calendario del mes inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud”* (parágrafo 2º art. 539 CGP).

Así, pues, cuando la solicitud incumple tales exigencias, es imperativo para el funcionario concursal, inadmitirla señalando sus defectos para que sean enmendados por el interesado, de no ser acatado, se procederá a su rechazo. En caso contrario y una vez sufragadas las expensas, le imprimirá el trámite de rigor como lo señala la normatividad –artículos 542 y siguientes- que supone una serie de efectos a partir de la aceptación –artículo 545-.

2. Precisamente, una fase introductoria se gesta en la audiencia de negociación de deudas *“que constituirá el nudo principal del procedimiento”* <sup>1</sup>, previa

---

<sup>1</sup> Pájaro Moreno, Nicolás. REGIMEN DE INSOLVENCIA PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE. ALGUNAS PREGUNTAS SOBRE LOS PROCEDIMIENTO DE INSOLVENCIA DE LA PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE. <https://letrujil.files.wordpress.com/2013/09/16nicolas-pajaro-moreno.pdf>

citación en legal forma de todos los acreedores que impone, en rigor, que tales actos de intimación se surtan con total transparencia permitiendo así el conocimiento real y efectivo para que el desenvolvimiento no se lleve a cabo a sus espaldas con violación de sus derechos superiores que ello acarrearía.

Esta audiencia constituye un acto de vital importancia *“la médula del procedimiento de negociación de deudas”* que busca sentar al deudor y sus acreedores a discutir la solución de la crisis. Una primera fase comprende el debate sobre los créditos incorporados por el deudor con miras a que ejerzan sus derechos de contradicción. En la segunda parte, se discutirá sobre la propuesta del deudor y se someterá a votación.

Dice la norma que el conciliador pondrá en conocimiento de los acreedores la **“relación detallada”** de las acreencias y les preguntará si están de acuerdo con la existencia, naturaleza y cuantía. En caso de disenso –objeciones – deberá procurar conciliarlas a través de distintas fórmulas de arreglo que, de declararse fracasada, procederá conforme los artículos 551 y 552 *ibidem*. El operador debe suspender la audiencia por el término de 10 días, para que, dentro de los cinco (5) primeros días, los inconformes presenten las objeciones por escrito junto con las pruebas que pretendan hacer valer. Otro término igual, correrá para los demás acreedores y deudor para que se pronuncien y aporten pruebas.

En ese norte, la intervención del Juez Civil Municipal se circunscribe, en una primera etapa, a la resolución de las objeciones, tal como lo prevé el artículo 552 de la Ley 1564 de 2012.

**3.** Trazado el anterior marco legal, se advierte que en el presente asunto corresponde a esta autoridad judicial resolver de plano sobre la calificación de créditos efectuada en el trámite insolvencia de persona natural no comerciante de Dionisio Martínez Rodríguez ante el Centro de Conciliación y Arbitraje Constructores de Paz.

**3.1.** Previo a abordar el asunto de fondo, es necesario hacer pronunciamiento a la solicitud del apoderado judicial del deudor, quien requirió que se rechazaran los reparos efectuados por formularse de forma extemporánea.

Al respecto, cabe aclarar que en el desarrollo de la negociación de deudas la relación detallada de las acreencias debe ponerse en conocimiento de los acreedores citados, a fin de que manifiesten sus inconformidades respecto de la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones, evento en el cual el conciliador designado se encuentra en el deber de proponer fórmulas de arreglo procurando que se sometan a discusión y de ser el caso sean conciliadas en la misma audiencia, en ese sentido, si no se logra llegar a un acuerdo, como se

adujo en líneas procedentes, se concede un término cinco (5) días a los objetantes para la sustentación por escrito y la remisión de los documentos correspondientes a la autoridad judicial.

De manera que, es la referida diligencia el momento procesal oportuno para formular objeciones en punto de la relación de créditos denunciados por el deudor para que sean debatidas al interior de la audiencia, sólo ante la imposibilidad de lograr un acuerdo se abre paso la intervención judicial, contando la parte objetante con el término reseñado en precedencia para desarrollar por escrito los argumentos previamente exteriorizados.

En tal sentido, en el caso puesto a consideración del Despacho se advierte que el escrito de objeciones se presentó dentro del término legal establecido pues, la audiencia de negociación de deudas se llevó a cabo el 8 de agosto de 2022, se presentó inconformidad por parte del Fondo Nacional del Ahorro frente a la cuantía de su obligación por lo que la operadora de insolvencia designada suspendió la diligencia, siendo así, los término de cinco (5) días de que trata la norma en cita fenecía el 16 de agosto de la presente anualidad, fecha en la cual se radicó a través de correo electrónico el escrito correspondiente, de ahí que se deban estudiar a profundidad los argumentos esgrimidos.

**4.** Ahora bien, en punto de las objeciones planteadas, como se señaló en líneas precedentes para acudir al procedimiento de negociación de deudas es menester que el deudor presente una solicitud de trámite atendiendo todos y cada uno de los requisitos dispuestos en el artículo 539 del estatuto procesal, entre estos, debe incluir una relación completa y actualizada de todos los créditos, en la que señale la cuantía de cada uno de ellos y diferenciando capital e intereses, la naturaleza de los mismos, amén que debe respetarse el orden de prelación y privilegios de créditos que señalan los artículos 2488 y subsiguientes del Código Civil.

Al respecto la Corte Constitucional en Sentencia C-092 de 2002 precisó: *“el legislador prevé un sistema de preferencias, dependiendo de la calidad del crédito. La prelación de créditos es pues, el conjunto de reglas que determinan el orden y la forma en que debe pagarse cada uno de ellos. Se trata entonces de una institución que rompe el principio de igualdad jurídica de los acreedores, **de modo que debe ser interpretada restrictivamente, ya que no hay lugar a decretar preferencias por analogía; sólo existen aquellas expresamente contempladas en la ley.***

*Las preferencias pueden clasificarse en generales y especiales. Las primeras permiten al acreedor perseguir todos los bienes del deudor para la satisfacción de su crédito, como sucede con los créditos de primera y cuarta clase. **Las segundas sólo afectan determinados bienes, como en el caso de los créditos hipotecarios, en los que sólo puede ser perseguido por el acreedor el bien sobre el que recae el gravamen,** de tal*

*forma que si queda un saldo insoluto, éste se convierte en un crédito común que se paga a prorrata con las demás acreencias no privilegiadas.” (énfasis fuera de texto).*

En ese sentido, a la luz de las disposiciones de la normatividad civil se estableció una división de créditos en cinco (5) clases, privilegiando a las cuatro primeras que por concurrir condiciones especiales deben tener preferencia y agrupando en la quinta clase los créditos comunes cuyo pago depende del remanente una vez canceladas las acreencias anteriores.

Entonces tenemos que: **i) en la primera** clase se encuentran los créditos derivados de las costas judiciales que se causen en el interés general de los acreedores, las expensas funerales necesarias del deudor difunto, los gastos de la enfermedad de que haya fallecido el deudor, los salarios, sueldos y todas las prestaciones provenientes del contrato de trabajo, los créditos fiscales, alimentos y artículos necesarios para la subsistencia, (Art. 2495 del C.C.), **ii) la segunda clase** comprende los créditos que pueden hacerse efectivos con bienes muebles del deudor aquellos que se encuentran en cabeza del posadero, causados en virtud de la posada; los del acarreador, en razón del transporte, y «los del acreedor prendario respecto de la prenda», (Art. 2497 del C.C), **iii) en la tercera clase** se encuentran los créditos hipotecarios (Art. 2499 ibídem), **iv) en la cuarta clase** están los créditos del fisco contra los recaudadores, administradores y rematadores de rentas y bienes fiscales, los de los establecimientos de caridad o de educación costeados por fondos públicos, y los del común de los corregimientos contra los recaudadores, administradores y rematadores de sus bienes y rentas, los del hijo a quien el padre administra los bienes y los de las personas que están bajo tutela o curaduría, contra sus respectivos tutores o curadores (art. 2502 ejusdem) y **v) la quinta clase** compuesta por aquellos créditos que no se encuentran incluidos en las clases anteriores, los también denominados quirografarios (Art. 2509 del C.C.).

**5.** La hipoteca es una garantía que se constituye sobre inmuebles que le permite al acreedor, en caso de mora, asegurar el pago de la prestación solicitando el embargo y posterior remate del bien, independientemente de la persona que ostente la titularidad o posesión del mismo, tratándose de un contrato de naturaleza accesorio que requiere de la existencia de una obligación principal y significando para éste un verdadero derecho real que lo hace tener preferencia respecto de otros tipos de créditos, la Corte Constitucional en Sentencia C-664 de 2000 la define como: “***una seguridad real e indivisible, que consiste en la afectación de un bien al pago de una obligación, sin que haya desposesión actual del constituyente, y que le permite al acreedor hipotecario, vencido el plazo, embargar y hacer rematar ese bien, sea quien fuere la persona que estuviere en posesión de él, para hacerse pagar de preferencia a todos los demás acreedores con títulos quirografarios.***”

En suma, la hipoteca podría definirse como un acuerdo de voluntades en virtud del cual se ampara el cumplimiento de una obligación principal a través de la imposición de un gravamen sobre un bien inmueble, de manera que el acreedor hipotecario puede obtener la satisfacción de su crédito de forma directa con el producto de la venta del predio sin importar su titularidad y en términos del artículo 1602 de la normatividad civil, como cualquier otro contrato, se traduce en ley para las partes contratantes.

Frente a la figura en comento ha de advertirse que además de ser un negocio jurídico de carácter accesorio y representar para el acreedor un derecho de persecución sobre los bienes gravados, se rige por los principios de especificidad e indivisibilidad, este último de conformidad con lo establecido en el artículo 2433 del Código Civil implica que la totalidad del bien o bienes hipotecados se encuentran destinados al pago de toda la deuda.

Al respecto, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en un pronunciamiento reciente, precisó:

*“1.4. Ahora bien, para demarcar los efectos de la accesoriedad, conviene considerar su relación con los principios de indivisibilidad y especificidad a que está sujeta la hipoteca.*

*1.4.1. El primero prescribe que el inmueble gravado, sus aumentos, mejoras, acciones, frutos e indemnizaciones (artículos 2445 y 2446), amparan el cumplimiento de cada una de las obligaciones garantizadas, incluyendo capital e intereses (artículo 2433), como certeramente lo dictaminó la Corte años atrás: «la finca hipotecada responde tanto por el principal como por los intereses» (SC, 10 dic. 1886, G.J. I, n.º 14).*

*Sostiene la doctrina:*

*El carácter indivisible de la hipoteca puede mirarse desde dos puntos de vista que operan simultáneamente: 1°. Desde el punto de vista del inmueble o los inmuebles hipotecados; 2°. Desde el punto de vista de la obligación garantizada con la hipoteca. Vista por el primer aspecto, **la indivisibilidad de la hipoteca significa que la totalidad del inmueble o de los inmuebles hipotecados, y cada una de sus partes** (cada molécula pudiera decirse), **están afectados al cumplimiento de la obligación principal**, mientras esta no se extinga totalmente. Vista por el segundo aspecto, la indivisibilidad de la hipoteca significa que cada parte de la obligación principal, y por lo mismo toda ella, tiene el respaldo o la garantía de todo el gravamen; de suerte que mientras subsista cualquier parte de la obligación principal sin ser satisfecha, por insignificante que ella sea, subsistirá la totalidad del gravamen<sup>2</sup>. (...)*

*el principio de especificidad, en este punto, se traduce en que las partes del contrato establezcan los criterios que servirán para que, en un momento determinado, puedan*

---

<sup>2</sup> César Gómez Estrada, De los Principales Contratos Civiles, Temis, 2008, p. 470.

*concretarse las obligaciones cubiertas por el gravamen. Laborio que puede consistir, bien en enumerar las obligaciones amparadas dentro de la escritura pública en que conste la hipoteca, ora en la simple indicación de los criterios que permitan identificarlas en un momento posterior.”<sup>3</sup> (negrillas del Despacho).*

**6.** De otro lado, para resolver el asunto puesto a consideración del Despacho es necesario traer a colación el artículo 547 del Código General del Proceso, que regula lo concerniente a los terceros garantes y codeudores, en el trámite de insolvencia de persona natural no comerciante, cuyo tenor cita:

*“Cuando una obligación del deudor esté respaldada por terceros que hayan constituido garantías reales sobre sus bienes, o que se hayan obligado en calidad de codeudores, fiadores, avalistas, aseguradores, emisores de cartas de crédito, o en general a través de cualquier figura que tenga como finalidad asegurar su pago se seguirán las siguientes reglas:*

*1. Los procesos ejecutivos que se hubieren iniciado contra los terceros garantes o codeudores continuarán, salvo manifestación expresa en contrario del acreedor demandante.*

*2. En caso de que al momento de la aceptación no se hubiere iniciado proceso alguno contra los terceros, los acreedores conservan incólumes sus derechos frente a ellos.*

*PARÁGRAFO. El acreedor informará al juez o al conciliador acerca de los pagos o arreglos que de la obligación se hubieren producido en cualquiera de los procedimientos.”*

La mentada disposición, no es otra cosa que, el desarrollo del principio de solidaridad al que se encuentran sometidas determinadas obligaciones, que permite al acreedor exigir de los demás obligados, en los eventos en que existen codeudores o terceros garantes, el cumplimiento de la prestación sin que se vean afectados sus derechos cuando uno de sus deudores acude al procedimiento de negociación de deudas.

En tal sentido, la solidaridad se presenta cuando en una relación obligacional existe pluralidad de partes, bien sea activa porque se estructura entre dos o más acreedores frente a un único deudor de modo tal que el pago es válido si se efectúa a favor de cualquiera de ellos, ora pasiva, cuando se trata de varios deudores y un acreedor, en estos casos el acreedor se encuentra facultado para exigir el cumplimiento de la totalidad de la prestación a todos o a cualquiera de los sujetos pasivos, tratándose de negocios mercantiles siempre que existan varias deudores se presumirá su responsabilidad solidaria.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia SC3097-2022 de fecha 3 de octubre de 2022, M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.




<sup>4</sup> Artículo 825 del Código de Comercio.



En cuanto a la solidaridad pasiva, la Jurisprudencia ha señalado que *“tiene como rasgo característico el que todos y cada uno de los obligados responden por el total de la deuda, es decir, que a los ojos del acreedor cada deudor responde como si fuera el único que se encuentra en la parte pasiva del vínculo obligacional. **Es por esto que la solidaridad constituye una caución para el acreedor; pues así se le garantiza que ningún obligado pueda pretextar que la deuda sea dividida.** Trátase, entonces, de la quintaesencia misma de la solidaridad, al punto de que donde se diga obligación solidaria se dice al tiempo que para el acreedor todos los obligados son iguales, y a cualquiera puede perseguir por la obligación entera<sup>5</sup>”* (negrilla fuera de texto)

7. Conforme a las líneas jurisprudenciales esbozadas, descendiendo al caso objeto de entrada se advierte la improsperidad de las objeciones planteadas por el Fondo Nacional del Ahorro respecto de la relación de acreencias presentadas en el trámite de negociación de deudas de Dionisio Martínez Rodríguez, toda vez que, la misma se efectuó en debida forma, con observancia de la normatividad que regula la materia, en especial, la reglas rigen la prelación de créditos.

En efecto, en la audiencia de negociación de deudas llevada a cabo el 8 de agosto del año en curso, se presentó a los acreedores la siguiente relación de acreencias:

 <b>CONSTRUCTORES DE PAZ</b> <small>CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE</small>		FORMATO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CREDITOS.					
		DEUDOR				FECHA Y HORA	
NOMBRE		DIONISIO MARTINEZ RODRIGUEZ			CEDULA	79.512.926	
NOMBRE O ENTIDAD ACREEDORA CEDULADA NIT.	NUMERO DE OBLIGACION	CALIFICACIÓN / PRELACIÓN	VR. CAPITAL PESOS	INTERESES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONCURSAL	APODERADO (NOMBRE, IDENTIFICACIÓN, CORREO Y TELEFONO)	FIRMA
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	PREDIAL AVALUADO EN 2020	PRIMERA	223.000	114.000	0,09%	AMIRRO RAMIREZ DE ESPITA	PRESENTE - CONCILIADO
FONDO NACIONAL DEL AHORRO	7951292600	TERCERA	239.009.366,96	33.086.906,08	92,38%	YEIMY ANDREA TORRES	PRESENTE - CONCILIADO
BANCO DAVIVIENDA		QUINTA	14.532.000,00		5,62%	AUSENTE	
BANCO SERFINANZA S. A		QUINTA	3.291.000,00		1,27%	AUSENTE	
TUVA S.A COMPAÑIA DE FINANCIACION			1.680.000,00		0,69%	AUSENTE	
TOTALES			298.735.366,96	33.200.906	100,00%		
DIONISIO MARTINEZ RODRIGUEZ						  BEATRIZ HELENA AMARA LOPEZ OPERADORA DE INSOLVENCIA	

De lo anterior se desprende que la deuda en favor del aquí objetante fue ubicada como un crédito de tercera clase, teniendo en cuenta que se encuentra

<sup>5</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, Expediente No. 5208, 11 de enero de 2000, M.P. Manuel Ardila Velásquez.

respaldada con la garantía real constituida respecto del bien inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-978743 y fue calificada en la suma de \$239.009.366,96 por concepto de capital y \$33.086.906,08 correspondiente a intereses, sumas que coinciden con las reportadas por el acreedor en los estados de cuenta obrantes al interior del asunto y a las que se hace referencia en el escrito mediante el cual se sustentaron las objeciones; de ahí que, en la graduación y calificación de créditos no se verifique ningún tipo de inconsistencia.

**8.** Ahora, frente a la inconformidad presentada por el deudor, en punto de la cuantía de la obligación, ha de señalarse que si bien en la copia de la escritura pública No. 1559 del 16 de septiembre de 2014 otorgada en la Notaría 60 del Círculo de Bogotá se observa que el gravamen hipotecario con relación al referido inmueble fue otorgado tanto por el insolvente Dionisio Martínez Rodríguez como por la señora Rosa Emilda Peña Garzón y que ambos figuran como titulares del derecho real de domino en partes iguales, según se constata del certificado de tradición y libertad allegado al trámite, esto bajo ninguna circunstancia hace significar que encontrándose los dos en trámite de insolvencia de persona natural no comerciante se deba exigir al acreedor hipotecario cobrar su crédito en los porcentajes que corresponden a cada uno de los concursados, como equivocadamente afirma el apoderado judicial del señor Martínez.

No se puede perder de vista, como se indicó líneas atrás, que la hipoteca es inescindible, por consiguiente, la totalidad del bien inmueble objeto de gravamen hipotecario garantiza el cumplimiento del saldo insoluto de la obligación a cargo del deudor luego, no es dable fraccionar la deuda y exigir el pago de forma separada como si se tratase de un crédito personal pues, para efectos del pago sólo puede ser perseguido por el acreedor el inmueble sobre el que recae dicho gravamen.

Aunado a lo ya expuesto, en el marco de una relación mercantil como la que ocupa la atención del despacho, existiendo pluralidad de deudores, en virtud al principio de solidaridad previsto en el artículo 825 del Código de Comercio el Fondo Nacional del Ahorro se encuentra plenamente facultado para perseguir la totalidad de la obligación frente a todos o a cualquiera de los codeudores, razón por la cual, puede hacerse parte en el procedimiento de negociación de deudas y cobrar al señor Dionisio Martínez Rodríguez el 100% del crédito en la cuantía que se adeuda, máxime si en cuenta se tiene que fue éste, quien se obligó de forma principal al suscribir el pagaré No. 79512 de fecha 16 de septiembre de 2014, de tal suerte que la graduación de créditos deba ajustarse a la realidad incluyendo el valor integral del capital e intereses, como en efecto se realizó, careciendo de relevancia jurídica si los deudores tienen o no una sociedad conyugal vigente, lo cierto es que, tratándose de una prestación solidaria, frente al acreedor se

encuentran en igualdad de condiciones y éste puede cobrar el total de la deuda a cualquiera de ellos.

**9.** Finalmente, se debe precisar que la posibilidad de que, en este caso el acreedor hipotecario, de forma conjunta pueda concurrir al trámite de insolvencia de la señora Rosa Emilda Peña Garzón, con el fin de obtener el pago de la misma deuda, tampoco se encuentra proscrito por la ley, es más el mismo legislador previó que se pudiesen continuar las acciones de cobro contra los terceros garantes sin que esto conlleve a un doble cobro o enriquecimiento sin justa causa, pues para ello se exige de forma expresa informar al operador de insolvencia los pagos o arreglos que de la obligación se hubieren producido.

**10.** Así las cosas, habrán de declararse infundadas las objeciones formuladas por Fondo Nacional del Ahorro Carlos Lleras Restrepo en el trámite de la referencia.

#### **IV. DECISIÓN**

En mérito de lo expuesto el **Juzgado Diecinueve (19) Civil Municipal de Bogotá D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

#### **V. RESUELVE**

**PRIMERO: DECLARAR INFUNDADAS** las objeciones formuladas por el acreedor Fondo Nacional del Ahorro Carlos Lleras Restrepo.

**SEGUNDO: ADVERTIR** a las partes que contra esta decisión no procede recurso alguno por expresa remisión, parte final del inciso 1º del artículo 552 del Código General del Proceso.

**TERCERO: REMITIR** por secretaría de INMEDIATO al Centro de Conciliación y Arbitraje Constructores de Paz las presentes diligencias para lo de su competencia. Déjense las constancias del caso. Oficiese.

**Notifíquese y cúmplase,**<sup>6</sup>

**IRIS MILDRED GUTIÉRREZ**  
**JUEZ**

---

<sup>6</sup> Esta providencia se notificó por estado No. 127 de 8 de noviembre de 2022.

**Firmado Por:**  
**Iris Mildred Gutierrez**  
**Juez Municipal**  
**Juzgado Municipal**  
**Civil 019**  
**Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **d1d236d4e4d23f7623a74df54e6063d4646d6acaf1880a2ef1dbc498411a8ce3**

Documento generado en 04/11/2022 03:45:09 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**